

Fiscalidad del comercio electrónico en el Reino Unido

El Reino Unido carece de normas específicas sobre imputación de beneficios a un establecimiento permanente (EP) que realice operaciones de comercio electrónico. La documentación de la administración fiscal se basa en las recomendaciones contenidas en las publicaciones de la OCDE en las Directivas Europeas para determinar los beneficios a imputar a un EP del Reino Unido, refiriéndose en primer lugar a las condiciones que se negociarían entre partes no vinculadas en transacciones similares, y recurriendo sólo en último extremo al método de reparto de beneficios. La normativa del Reino Unido sobre precios de transferencia prevé un enfoque similar del reparto de beneficios entre personas vinculadas.

El Reino Unido no se ha esforzado demasiado en adoptar medidas fiscales específicas para determinar si los no residentes que realizan operaciones de comercio electrónico con residentes están sujetos a los impuestos sobre la renta o de sociedades, como tampoco ha determinado hasta qué punto se gravan los beneficios derivados de esta actividad.

Los no residentes que comercian en el Reino Unido a través de una sucursal o agencia están sujetos a gravamen. Este criterio se ha adoptado conforme a la jurisprudencia clásica, y se concreta principalmente en el cierre de contratos en el país, si bien cada vez más se tiene en cuenta el lugar de realización de beneficios. Si el operador es residente en un país que ha firmado un convenio con el Reino Unido, existirá el gravamen únicamente cuando el interesado tenga un EP. La administración fiscal ha considerado que la sola existencia de un sitio web en un servidor en el Reino Unido no constituye necesariamente un EP, a diferencia de otros países.

En la actualidad, en el Reino Unido existe retención del impuesto sobre la renta, al tipo básico, en ciertos pagos de cánones a no residentes en concepto de derechos de autor, aunque se ha propuesto la extensión del campo de la retención a la propiedad intelectual. Si el beneficiario reside en un país que forma parte de un convenio de doble imposición, el pagador está obligado a retener siempre que las autoridades fiscales competentes no hayan admitido reclamación al efecto del beneficiario, y que la administración fiscal no haya advertido al pagador de que no lleve a cabo la retención en futuros pagos o que les aplique un tipo de retención menor.

En general, la política de la administración fiscal se ha basado en examinar si las leyes y conceptos fiscales existentes (en lo que se refiere a caracterización de rentas, el EP y el lugar de residencia de las sociedades) son aplicables al comercio electrónico. Al mismo tiempo, también se ha centrado en determinar cuándo es necesario hacer cambios para proteger los ingresos fiscales y asegurar la neutralidad entre el comercio electrónico y otros tipos de comercio, así como en velar por la efectividad de estos cambios.